



Configurar un círculo virtuoso de gobernanza pública

Por: Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Estamos viviendo un verdadero cambio de época, más que una época de cambios. Hoy, más que nunca, el desafío que enfrentamos como sociedad es mejorar las capacidades de gobernanza y crear las condiciones para la prosperidad compartida y el desarrollo social sostenible. En este contexto, a solo horas de las elecciones la responsabilidad democrática de elegir buen gobierno, nunca ha sido tan importante como ahora. Las elecciones de 2020 ofrecen de nuevo la oportunidad de cerrar la brecha entre elegir gobierno, el gobernar y el gestionar para construir un mejor país y renovar la esperanza de vivir una vida mejor.

Para ello, se requiere que los ciudadanos atiendan el momento electoral de manera informada, racional y consciente de los deberes y de las responsabilidades que le corresponde en la democracia. El voto es el instrumento más poderoso que tiene la ciudadanía en sus manos para construir buen gobierno y contribuir a atajar la corrupción. El no ejercer el derecho al voto o ejercerlo de manera irresponsable tiene consecuencias irreversibles para el bien común de la sociedad.

La oportunidad que nos presenta la coyuntura actual es centrarnos en el impacto cualitativo de nuestras decisiones y acciones para generar soluciones a los problemas complejos que nos afectan y movernos a la acción rompiendo con los narrativos disruptivos que aumentan las divisiones en detrimento de la innovación y el cambio transformacional. Es impostergable darle importancia a la obligación compartida de todos los actores de la sociedad que nos muevan a un desarrollo social sostenible y un crecimiento económico inclusivo. En esta ocasión no podemos darle espacio a que se creen falsos liderazgos y que ocupen el campo los políticos populistas y la propaganda mediática.

El principal reto para construir un futuro mejor es asegurar que el buen gobierno se convierta en una fuerza impulsora para mejorar el bienestar de la gente y cerrar la brecha de la desigualdad social. Para lograrlo es necesario un cambio sustancial, la inercia no es una opción. Para alcanzar el futuro que queremos para todos, va a ser necesario un alto grado de consistencia en las políticas públicas y una mejora sustancial en las prácticas de gobernanza. El momento electoral es siempre propicio para la discusión abierta y transparente de los retos que enfrentamos como sociedad. Quizás no haya un desafío más crítico y apremiante que superar la incompetencia del gobierno que nos desgobierna.

El buen gobierno es enemigo del cálculo y la manipulación. Como no empezamos a reconstruir los fundamentos de nuestra vida en democracia, que comienza con volver a educar conforme a las bases de un gobierno virtuoso, no esperemos más que las consecuentes malas prácticas de gobierno que engendran el desgobierno y la corrupción. Una ruptura con las malas prácticas de gobierno requiere que los líderes gobiernen con prudencia fiscal, centrado en las necesidades de los ciudadanos y focalizando su gestión en los resultados para satisfacer las necesidades de la población y guiados por principios y los fundamentos de la buena gobernanza pública.

Crucial un cambio radical en la forma de gobernar

Para construir la sociedad próspera, pluralista y equitativa a la que aspiramos tenemos que ser capaces de conformar una voluntad capaz de llevar a cabo las transformaciones que exige el país para hacer frente a las realidades inaceptables que nos aquejan como la corrupción, el desgobierno, la pobreza y la desigualdad. Más aún, para conjugar el proyecto de país que exige la coyuntura actual tenemos que ser capaces de cerrar la brecha existente entre lo discursivo y lo práctico. No podemos continuar restándole atención a la importancia del proceso electoral y no podemos justificar e ignorar la relevancia de las capacidades de gobierno.

En esta instancia de las elecciones 2020, es esencial reflexionar y actuar sobre las acciones estratégicas que debemos emprender para lograr cerrar la brecha entre las tres instancias del proceso de gobernar: el político-electoral, el de constituir gobierno y el de gobernar propiamente. Esta confusión tiene que ser entendida y atendida como continuidades que se retroalimentan. Ninguna de ellas puede, de manera aislada,

asegurar la concreción plena de la búsqueda de la prosperidad y el bien común de la sociedad.

Por ello, en esta ocasión no podemos permitir que esa primera instancia, la electoral, se quede sólo en las promesas de los candidatos, la demagogia política y la propaganda mediática. Es cuestionable que los programas de gobierno de los partidos se hayan publicado a días de las elecciones creando un vacío de información vital para el escrutinio ciudadano de los partidos políticos y los candidatos. Las circunstancias atípicas de este proceso electoral obligan a los ciudadanos a exigir información completa sobre el plan de acción concreto que se propone implantar cada candidato de ser elegido en 2020. Es a través de la transparencia de la información que podemos ampliar las posibilidades de hacer un mejor escrutinio de los candidatos para maximizar la diversidad y la riqueza de los saberes y los talentos de la sociedad y de sus contextos para encauzar los cambios que el momento histórico que vivimos exige.

En estos tiempos de complejidad y cambios disruptivos la sociedad necesita una visión y formas nuevas de hacer gobierno, política y economía. Si seguimos aplicando la receta actual nos seguirá arrojando la desigualdad, la pobreza y la violencia. Necesitamos un cambio profundo y radical, de lo contrario seguirá aumentando el desasosiego y generando más desigualdad y deshumanización de la sociedad. Urge una regeneración de raíz, un saneamiento profundo, una nueva gobernanza y una cosmovisión social renovada.

En su publicación *Una nueva gobernanza para Puerto Rico* de 2013 el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa plantea que la gobernanza, más allá de ser un proceso que implica múltiples interacciones para alcanzar objetivos preestablecidos, tiene un claro elemento estructural basado en las capacidades institucionales y el conocimiento de las reglas y normas aplicables. Por tanto, la gobernanza es un sistema de gobierno que requiere de un liderazgo competente y de interacciones diversas para acordar los objetivos, los recursos y las actividades a realizar para alcanzarlos y estructura porque no opera en un vacío, sino en el contexto de unas instituciones particulares y de un conocimiento específico de valores y principios democráticos y de un estado de derecho integrado y coherente. Asimismo, los estudios de investigación del Centro de Gobernanza puntualizan que para una buena gobernanza es necesario considerar la voluntad política y la capacidad de gestión para prever y responder con flexibilidad y agilidad estratégica a los retos que pueden surgir en el proceso de gobernar.

Las tensiones que vivimos en estos tiempos de pandemia del coronavirus, luego de la devastación causada por los terremotos y los huracanes que nos han afectado durante los pasados años y la prolongada crisis fiscal de hace más de una década, deben servir de motor para institucionalizar un proceso de gobernanza pública que permita gestar una nueva relación entre instituciones e individuos. Para ello no podemos continuar aceptando que los gobiernos de turno continúen gestionando el País bajo la falsa premisa de que la administración pública y el partido político son la misma cosa. Este entendido incorrecto ha debilitado y deteriorado las instituciones lo que ha resultado en un manejo negligente de los recursos públicos y en la incapacidad de proveer servicios públicos de calidad para atender las necesidades esenciales de la población. La falta de

transparencia ha generado desconfianza y restado credibilidad para adelantar los sueños y aspiraciones de los ciudadanos. Por su parte, las conductas adversativas han menguado la capacidad de diálogo constructivo para fortalecer la toma de decisiones y el análisis de riesgo indispensable para generar cambio y transformación económica y social en favor del bien común de la sociedad.

Superar la incompetencia de la clase gobernante debe comenzar por entender que la gobernación es un trabajo de beneficio colectivo concebida como el vehículo para servirle a la sociedad y no para servirse de ella y cambiar la forma irresponsable de manejar los recursos del estado. Si algo ha quedado claro en esta gesta de pueblo es que cada ciudadano es distinto en pensamiento, en la manera de ver la vida y en su accionar, pero eso no nos distancia en el interés y el compromiso de forjar un mejor país.

En la coyuntura actual de crisis económica y fiscal se ha tornado más evidente que se mezcla y confunde la gestión del gobierno con la del partido político. Los resultados de los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa destacan que Puerto Rico encara una serie de obstáculos en su capacidad de gobernarse que ha impedido alcanzar el desarrollo, la competitividad económica y la prosperidad general requerida para propiciar el bien común. La debilidad en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, muy especialmente de índole económica y fiscal, de las pasadas décadas ha estado enmarcada en la respuesta a intereses particulares, con mayor énfasis en el interés electoral, y no en consideración al interés colectivo o la voluntad política general. Además, los resultados de las investigaciones señalan que la buena gobernanza apoyada en una gestión pública eficiente y eficaz, que impulse el desarrollo económico y la cohesión social, constituyen la piedra angular del desarrollo sostenible.

En consecuencia, es necesario que los ciudadanos salgan de este enredo conceptual para dar un paso en la mejora de la cultura de buen gobierno y evitar los efectos adversos que arruinen la vida en democracia. Cuando hablamos de Estado es importante significar que el interés de su gestión es atender los intereses de largo plazo del conjunto de instituciones que conforman el estado. En cambio, el gobierno es la autoridad que dirige y administra sus instituciones. Es el conjunto de instituciones, estructuras administrativas que ejercen las actividades estatales. Por su parte, el partido político es un grupo organizado de personas que comparten objetivos y opiniones políticas semejantes y que buscan influir en las políticas públicas mediante la elección de sus candidatos para cargos públicos.

La transgresión de los límites entre estas instituciones de la sociedad enfrenta el riesgo de debilitar la credibilidad y la confianza en las instituciones democráticas y provoca actitudes de apatía y rechazo hacia lo público de insolidaridad y de individualismo poco responsable. La horrenda confusión que surge de la falta de claridad del rol y las funciones del marco institucional le ha restado efectividad y capacidad de generar resultados a la gestión de lo público. En vez de enfrentar los retos económicos y sociales propiciados por los huracanes, los terremotos y la pandemia que vivimos el gobierno los agrava manchando en escándalos de corrupción la confianza pública. John Kenneth Galbraith, Premio Nobel de Economía, decía que la ignorancia es una de las mayores amenazas para la democracia, de ahí la necesidad de ordenar las ideas distinguiendo

claramente que no es lo mismo actuar para sí, que para el partido en el que se milita, o para la función institucional que se ejerce.

Para atender el círculo vicioso del desgobierno que nos aqueja se necesita atender la distinción entre gobierno y partido político que abre espacios oscuros para las conductas corruptas. Cada vez se hace más necesario poner al ciudadano al centro de la gestión pública y la coherencia y la articulación de la acción pública en términos de la definición clara de los problemas, la toma de decisiones y su ejecución. Antes de adoptar un curso de acción o política pública para generar soluciones a un asunto público es necesario identificar con precisión el problema y definir las necesidades reales de los ciudadanos. Este esfuerzo depende de la capacidad de los actores públicos y la sociedad civil para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos. La improvisación y la formulación de políticas públicas y proyectos “fast track” debe ser remplazada por la formalidad y rigor de los protocolos diseñados para formular la política pública.

En medio de la incertidumbre económica y fiscal actual resulta imperativo desarrollar una cultura de buen gobierno, transparencia e integridad pública; focalizar en la gobernanza transparente y abierta y ser más estratégicos en la formulación de las políticas públicas. De igual forma, es apremiante transformar las prácticas de gestión pública para asegurar la eficacia, la eficiencia y la calidad de la prestación de los servicios. Empezar con rigor y disciplina la gobernanza como forma de gobernar nos permitirá elevar la vara hacia los verdaderos valores democráticos que servirán de soporte para alcanzar la prosperidad, el crecimiento de la economía, la generación de riqueza, la creación de empleos y el bien común de la sociedad.

Al reflexionar sobre la realidad de Puerto Rico en el contexto de la gobernanza pública el estudio sobre *Gobernanza y responsabilidad fiscal* realizado por el Centro de Gobernanza en 2014 puntualiza que “es evidente que el país se encuentra entre la paradoja y la encrucijada. Por una parte, gobernar en gobernanza es imprescindible para promover la gobernabilidad en el país y adelantar la agenda de desarrollo sostenible; mientras que, por otra parte, los formuladores y gestores de la política pública parecen evitar a toda costa las estrategias y los procesos que adelantan una agenda reformista y de transformación a la altura de los tiempos.”

Hemos llegado a la paradoja donde las soluciones gubernamentales están creando mayores problemas que los problemas originales. Continuamos viendo que las malas decisiones públicas surgen por la ausencia de estrategia adecuada y la falta de capacidad institucional. Se apuesta a soluciones parciales, en principio acertadas, para enfrentarse a un problema y acaban por generar dificultades mayores por no tener en cuenta los posibles efectos secundarios en otros sectores.

Reflexiones finales

Para hacer de este evento electoral un momento regenerador y fundacional de una nueva forma de gobernar es necesario elegir mejores gobiernos y combatir la corrupción. La propia doctrina de la iglesia plantea que los criterios de propósito social y de bien común deben regir el proceso de gobernar y las reformas de la economía mundial para propiciar

una prosperidad compartida y resolver la desigualdad que amenaza el tejido social. Se trata entonces de ejercer el derecho al voto para conjugar buen gobierno de manera educada, informada y en beneficio de todos.

Los asuntos apremiantes que tenemos que atender como colectivo exigen de ciudadanos informados y gobiernos competentes capaces de actuar, producir y reconstruir el País. Para lograrlo es necesario mejorar la calidad de la gobernanza, romper con la crisis de opacidad en la gestión de los asuntos públicos y combatir la corrupción que retrasa la prosperidad y el bienestar social. Necesitamos romper el círculo vicioso de incompetencia, falta de transparencia, irresponsabilidad fiscal y de inmediatez con que el gobierno actúa sólo en función del corto plazo, generando enormes problemas para las generaciones futuras. Es impostergable someter a escrutinio público la información relativa a la administración y gestión gubernamental, al manejo de los recursos fiscales y humanos que la sociedad le ha confiado, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos. Es apremiante generar un círculo virtuoso que integre todos los sectores de la sociedad en la construcción del mapa de ruta para transformar el País.

En este sentido, en este ejercicio electoral los ciudadanos tienen el deber de analizar con rigor los planteamientos de los partidos políticos y rechazar los candidatos que se esconden tras la práctica política de la demagogia y la retórica que busca avivar las pasiones, las emociones y los miedos para conseguir el favor de la gente. La manipulación de la información para ocultar datos o presentar verdades a medias no puede formar parte del ejercicio democrático más importante que tiene nuestra democracia. No podemos seguir permitiendo que la clase política deliberadamente confunda la democracia con la demagogia.

Para crear un mejor futuro y trazar el camino a seguir es necesario lograr un cambio real y verdadero en la forma de gobernar. En esta tarea histórica urge continuar sumando talentos y voluntades para superar la crisis de gobernanza provocada por el deterioro de nuestras instituciones y nuestros valores lo que ha propiciado la corrupción y la impunidad. Transitar hacia un modelo de gobernanza en que las relaciones entre gobernantes y gobernados permitan construir las decisiones públicas de manera conjunta entre el gobierno, los diversos sectores de la sociedad y el sector privado es esencial para darle dirección a la reconstrucción del país.

En la construcción de esta agenda hay que reconocer que no hay rutas únicas para potenciar el desarrollo y la prosperidad y no hay una sola receta que sea válida para resolver todos los problemas que encaramos. El reto inmediato es lograr priorizar de manera adecuada las necesidades esenciales de la población y cristalizar las prioridades a atender de una manera clara y fácil de comunicar para guiar la implantación de políticas públicas coherentes para desarrollar la economía y propiciar el bien común de la sociedad.

Reflexionando sobre el pensamiento de Max Weber en ocasión del centenario de su natalicio es oportuno puntualizar que “el político por vocación debería estar al servicio del bien común antes que al servicio de dudosos ideales, que con frecuencia son la coartada para destruir o desvirtuar el bien común”. En este sentido, tenemos que rescatar la integridad y la capacidad política para cambiar la dirección del país. El gran desafío

que tenemos en esta coyuntura histórica es encontrar las salidas y soluciones para luchar y superar la crisis de gobernabilidad que nos amenaza con continuar deteriorando la economía y el bienestar social de la población.

Veamos en este proceso electoral la oportunidad para desarrollar la hoja de ruta y las estrategias para crear un futuro mejor. El llamado en estas elecciones es a ejercer un voto responsable, informado, educado e inteligente a favor de cerrar la brecha socioeconómica que ha incrementado la desigualdad y romper y transformar la gobernanza pública que por décadas ha favorecido la fragmentación y el individualismo en vez de facilitar la transparencia de la información como elemento esencial para promover el conocimiento y los saberes que guían el pensamiento crítico que genera buen gobierno, resultados e innovación. El desafío para los ciudadanos en las elecciones 2020 es el de elegir los mejores candidatos para liderar el cambio de época que vivimos en beneficio de todos.

Octubre 2020